



Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintiuno (2021)

**REFERENCIA**

**EXPEDIENTE No.:** 11001 33 35 010 2018 00203 00  
**ACCIONANTE:** LEIDY JOHANNA RODRÍGUEZ BERMUDEZ  
**ACCIONADO:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
**CLASE:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

De conformidad con el informe secretarial que antecede, se procederá a determinar si en el caso de estudio hay lugar a prescindir de las audiencias y proferir sentencia anticipada.

Sea lo primero señalar, que el artículo 182A del C.P.A.C.A., faculta al Juez para proferir sentencia anticipada sin necesidad de celebrar audiencia inicial y audiencia de pruebas. Las condiciones para prescindir de la respectivas audiencias se enuncian así: (i) cuando el asunto sea de puro derecho; (ii) cuando no haya que practicar pruebas, (iii) cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento, y, (iv) cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles. Por manera que los presupuestos para prescindir o no de la audiencia inicial, se contraen a evaluar los requerimientos probatorios para definir el asunto.

No obstante, el artículo 180 (Num. 6º) del CPACA, modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de 2021, determinó que en el auto que se pronuncie sobre las pruebas se decidirán las excepciones pendientes de resolver y la fijación del litigio. Al armonizar esta norma con la citada en el párrafo anterior - artículo 182A del CPACA – resulta válido afirmar que al momento de revisar las aludidas condiciones para prescindir de la celebración de las respectivas audiencias, se pueden decidir las excepciones previas y la fijación del litigio. Ello se explica en que el artículo 180 del CPACA estableció que previo a pronunciarse sobre las pruebas se deben decidir las excepciones previas y fijar el litigio. La secuencia de las decisiones obedece a que en caso de prosperar alguna excepción previa, resultaría inoficioso tratar el tema probatorio. Igualmente, al revisar la fijación litigio se adquiere el criterio suficiente para determinar la pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas que soliciten las partes. Siendo así, el Despacho primero asumirá el estudio de las excepciones previas y de la fijación del litigio, antes abordar los aspectos probatorios a los que alude el artículo 182A del CPACA.

**1. EXCEPCIONES**

Con la contestación de la demanda se expresa que propone la excepción previa de caducidad. Sin embargo, se aprecia que al formular las excepciones de mérito existe una que denomina “los actos de ejecución no son susceptibles de control judicial”. Tal excepción se despachará como previa por apuntar hacia la ineptitud de la demanda. La parte actora no recorrió el traslado de las anteriores excepciones. El Despacho se pronunciará en el mismo orden que se plantearon las excepciones.

**1.1 Caducidad.** La defensa considera que se había vencido el plazo de los cuatro (4) meses para interponer la demanda, previsto en el artículo 164 del CPACA. El término lo contabiliza a partir de la notificación del acto acusado: la Resolución 2989 de 6 de



octubre de 2017 “por medio del cual se efectúa un nombramiento en periodo de prueba y se da por terminado un nombramiento en provisionalidad”.

Al analizar el caso, observa que el hecho octavo de la demanda, la demandante reconoce que el 9 de octubre de 2017 tuvo conocimiento de la decisión acusada, mediante correo electrónico. Incluso, señala que la conciliación extrajudicial se radicó el 1º de marzo de 2018 ante la Procuraduría General de la Nación, con lo cual quiso decir que tampoco interrumpió el término extintivo del presente medio de control. Es más, considera que el Agente del Ministerio Público debió rechazar la conciliación porque el artículo 2º (Par. 1º) del Decreto 1716 de 2009 dispone que no son conciliables los asuntos que han caducado.

El análisis lo realiza en el entendido que el mencionado plazo se debe contabilizar a partir de la comunicación del acto por correo electrónico. Tal postura se apoya en el artículo 2.2.5.1.6 del Decreto 1083 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 648 de 2017, según el cual el acto se comunica al interesado por medio físico o electrónico. Refuerza su planteamiento con el artículo 87 del CPACA, en cuanto señala que los actos quedan en firme desde el día siguiente a su comunicación, cuando no proceden recursos contra los mismos.

Para decidir se CONSIDERA:

El artículo 164 (Num. 2º, Lit d) del CPACA establece los eventos a partir de los cuales se contabiliza cuatro (4) meses de vigencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Señala, alternativamente, que se puede tomar el momento de la “comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso”. Para el Despacho, no es de recibo la postura de la defensa en el sentido que la comunicación del acto acusado se constituye en el evento a partir del cual comenzó a correr el plazo para demandar. La razón estriba en que propio acto demandado condicionó sus efectos jurídicos a partir del momento en que se posesionara el concursante elegido en periodo de prueba, pues es en este momento que se terminaba el nombramiento provisional de la accionante. En efecto, expresamente el artículo tercero de la Resolución 2989 de 6 de octubre de 2017 dispone lo siguiente:

*“Dar por terminado el nombramiento provisional efectuado a LEYDI JOHANA RODRÍGUEZ BERMUDEZ, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 52.863.737 en el cargo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18, de la Planta de Personal Global del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección de Contratación, a partir de la fecha de posesión en periodo de prueba del (de la) señor (a) JOSE EVARISTO SALAMANCA GUTIÉRREZ, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.”*

Así las cosas, la administración tenía la carga de aportar el acto de posesión del nominado con el fin de conocer la fecha a partir de la cual se contabilizan los cuatro (4) meses de caducidad. Ante la omisión de la entidad, el Despacho observa que en el acápite de las pretensiones y de la cuantía se informa que la provisionalidad se terminó el 1º de noviembre de 2017, momento a partir se reclaman los beneficios laborales. Esto significa que a partir del día siguiente – 2 de noviembre de 2017 – empezaba correr el término de caducidad, pues el nominado se tuvo que haber posesionado el 1º de noviembre de 2017. Siendo así, la afectada tenía plazo hasta el jueves 1º de marzo de 2018, a más tardar a las 5 p.m., para acudir a la administración de justicia. Determinado el evento y el vencimiento de la acción, resta examinar si el



libelista actúo por dentro o por fuera del término legal previamente establecido. Veamos:

El 1º de marzo de 2018, último día plazo, la demandante presenta la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación. El trámite de la conciliación extrajudicial lo adelantó la Procuraduría 142 Judicial II para Asuntos Administrativos. El 29 de mayo de 2019 se expidió la constancia, según la cual en la misma fecha se declaró fallido el trámite conciliatorio. En ese mismo día se radicó la demanda ante la Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos de Bogotá, según el acta individual de reparto que obra en el expediente. Se sigue lo anterior, que la demanda se interpuso en el último día hábil vigente de la acción, y por consiguiente, más adelante se declarará infundada la excepción de caducidad.

**1.2. Ineptitud de la demanda porque “los actos de ejecución no son susceptibles de control judicial”.** La defensa considera que la Resolución 2989 de 6 de octubre de 2017 constituye un acto de ejecución porque da cumplimiento o materializa la lista de elegibles remitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC. A su criterio, la entidad no tenía otra alternativa que dar cumplimiento a la Ley 909 de 2004 en materia de concursos públicos. Ello implicaba desvincular a quien se encuentre en provisionalidad. Agregó que los actos de ejecución sólo son demandables cuando omite aspectos sustanciales.

Para decidir se CONSIDERA:

Si bien es cierto, la Resolución 2989 de 6 de octubre de 2017 ejecuta la lista de elegibles, únicamente el nombramiento constituye un acto de ejecución. En lo relacionado con la terminación de la provisionalidad, constituye una decisión definitiva porque impidió que la demandante continuará con el nombramiento en provisionalidad. Así lo establece el artículo 43 del CPACA “*Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación.*”. En vista que la demandante no ataca el nombramiento del elegido, sino la terminación del nombramiento en provisionalidad, se puede afirmar que ésta decisión si es objeto de control judicial. Por tal motivo, también se declarará infundada la excepción en estudio.

## **2. FIJACIÓN DEL LITIGIO.**

La demanda persigue la nulidad del acto por medio del cual se terminó el nombramiento en provisionalidad en el cargo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 18. Se trata de la Resolución 2989 de 6 de octubre de 2017, expedida por el Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. A título de restablecimiento del derecho se pretende que se haga el reintegro al cargo que se ocupaba u otro de igual o superior categoría con el consecuente reconocimiento de los salarios y prestaciones dejados de percibir.

En corolario de las pretensiones, el litigio se fija en los siguientes términos: determinar si la accionante tiene o no derecho al reintegro al cargo que se ocupaba u otro de igual o superior categoría con el consecuente reconocimiento de los salarios y prestaciones dejados de percibir.



### 3. PRUEBAS.

Las partes no solicitaron la práctica de pruebas porque las aportaron con la demanda y la contestación de la demanda. Por ello, el Despacho decretará e incorporará al expediente las pruebas anexadas con la demanda.

### 4. AUDIENCIAS.

Es claro que están reunidas las condiciones para prescindir de las audiencias de inicial y de pruebas, previstas en el artículo 180 y 181 del CPACA, respectivamente. Sobre la audiencia de alegaciones y juzgamiento enunciada en el artículo 182 del CPACA., se resolverá una vez cobre ejecutoria la presente providencia. Ello, por cuanto el artículo 182A del CPACA exige que se cumpla lo decidido sobre las excepciones previas, las pruebas y la fijación del litigio, antes de avanzar con el trámite del proceso.

Por lo expuesto, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

### DISPONE

**PRIMERO. DECLARAR** que infundadas las excepciones de caducidad y estudiada como ineptitud de la demanda porque “los actos de ejecución no son susceptibles de control judicial”, por las razones antes expuestas.

**SEGUNDO. La FIJACIÓN DEL LITIGIO** se centrará en determinar si la accionante tiene o no derecho al reintegro al caro que se ocupaba u otro de igual o superior categoría con el consecuente reconocimiento de los salarios y prestaciones dejados de percibir.

**TERCERO. DECRETAR E INCORPORAR** al expediente, con el valor legal que les corresponda, todos y cada uno de los medios de pruebas aportados con la demanda y con la contestación de la demanda, así como las legales oportunamente aportadas al proceso.

**CUARTO. PRESCINDIR** de la audiencia inicial y de pruebas establecidas en la ley para tramitar el proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 182A del CPACA.

**QUINTO.** Ejecutoriado el presente auto, devuélvase el expediente al Despacho para continuar con el trámite pertinente.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**LUZ ADRIANA MÉNDEZ MARTÍNEZ**  
**JUEZ**

gpg

Firmado Por:

LUZ ADRIANA MENDEZ MARTINEZ  
JUEZ

JUZGADO 010 ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.-SANTAFE DE BOGOTÁ D.C.,



REPUBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ  
Sección Segunda

Expediente: 11001-33-35-010-2018-00203-00

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**5d8e3717b8f5f681fb61bff8533f3ed6c54d55094c97bfb532ed82c691a65271**

Documento generado en 22/04/2021 09:53:36 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**

**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**